

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 24º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-10394-2023
CARATULADO : MANZANO/FISCO - CDE

Santiago, cinco de Agosto de dos mil veinticuatro

VISTOS.

Con fecha 26 de junio de 2023, al folio 1, don Boris Paredes Bustos, abogado, domiciliado en Pasaje Dr. Sotero del Río N°326, oficina N°707, comuna de Santiago, en representación de doña **Yanet Manzano Kasis**, chilena, casada, auxiliar de servicio, cédula de identidad 10.949.423-2, domiciliada en Población Hermanos Carrera 396, Quillota; doña **Paola Manzano Kasis**, chilena, soltera, dueña de casa, cédula de identidad 11.519.981-1, domiciliada en Villa Rapanui, pasaje Taitiare N°1213, Quillota y doña **Sandra Manzano Kasis**, chilena, casada, profesora de educación general básica, cédula de identidad 12.002.698-4, domiciliada en calle Alemania N°1713, Quillota, interpone demanda de indemnización de perjuicios en contra del **Fisco de Chile**, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Raúl Letelier Wartenberg, abogado, ambos domiciliados Agustinas 1225, Piso 4, comuna de Santiago, a fin de que se declare en definitiva el derecho de los actores a ser indemnizados por los actos ilícitos descritos en la demanda, cometidos por agentes del Estado y condenando al Demandado Fisco De Chile a pagarles la suma de \$300.000.000 a cada una, o la suma que en justicia se sirva fijar el tribunal, con costas.

Indica que los hechos descritos se encuentran acreditados en la causa Rol N°35.738-AG del Segundo Juzgado de Letras de Quillota, episodio “Asalto a la Patrulla Militar”, este fallo fue dictado con fecha 27 de octubre del año 2008. La I. Corte de Apelaciones de Valparaíso, conociendo de un recurso de apelación contra el fallo señalado, reprodujo la sentencia en lo referente a los hechos acreditados (causa Rol 82-2009). Asimismo, la sentencia de reemplazo dictada por la E. Corte Suprema, fallo Rol 7436-



Foja: 1

2009 de fecha 21 de abril de 2022, vuelve a reproducir el fallo en lo concerniente a los hechos. Por tanto, en la causa Asalto a la Patrulla Militar, se tiene por acreditado lo siguiente:

“El día 17 de enero de 1974 efectivos militares sacaron desde la Cárcel Pública de la comuna de Quillota a Hugo Hernán Aranda Bruna, Julio Arturo Loo, Manuel Hernán Hurtado Martínez, Osvaldo Manzano Cortés, Ángel Mario Díaz Castro y Víctor Enrique Fuenzalida Fuenzalida, -dirigentes sindicales, todos militantes o simpatizantes de izquierda-, siendo conducidos por ellos al Regimiento de Ingenieros N°2 “Aconcagua” donde quedaron detenidos; recinto en el que ese mismo día se presentaron voluntariamente Pablo Gac Espinoza, -ex Alcalde de la ciudad-; Rubén Guillermo Cabezas Pares, -ex Fiscal de la Corporación Local de Reforma Agraria (CORA)-, y Levy Segundo Arraño Sancho, -Presidente del Comité de Campesinos del sector San Isidro-, también militantes o simpatizantes de partidos políticos de izquierda-, previa citación que se les hiciera en sus domicilios y lugares de trabajo por personal uniformado vestido de civil, quedando también detenidos.

Posteriormente todos ellos, -en las últimas horas de ese día o en las primeras horas del día 18 de enero de 1974-, subidos a vehículos que, en número de cuatro y fuertemente custodiados por contingente de Ejército, los trasladarían a la Escuela de Caballería Blindada, recinto al cual dicha columna militar no llegó debido a que al atravesar ella por el Paso bajo nivel denominado San Isidro, fue objeto de una “emboscada” simulada, pues se produjeron “explosiones de granadas” y “ráfagas de metralleta” desde ambos lados del señalado Paso que alcanzaron a los vehículos que la componían, constituyéndose en el lugar para prestar apoyo, -previa orden superior-, personal de dotación de la referida Escuela, apreciándose momentos después que uno de éstos se incendiaba resultando por un lado que, del contingente uniformado, sólo uno resultó con una lesión cuya naturaleza no se acreditó y, por otro, de los detenidos, todos en definitiva resultaron fallecidos como consecuencia de las múltiples lesiones provocadas en sus cuerpos por proyectiles, -según concluyeron los protocolos de autopsia de los Sres. Aranda, Loo, Hurtado, Manzano, Díaz y Fuenzalida-, los cuales fueron conducidos de regreso en algunos de los vehículos que



Foja: 1

componían el convoy hacia el Regimiento del cual habían salido momentos antes para ser luego trasladados, siempre por personal militar. En ese lugar, se descubrió que uno de ellos no estaba muerto, sólo herido en la balacera del Paso, quien fue ultimado en un camino cercano momentos después, víctimas todas que el Gobernador Militar entregara a sus respectivos familiares en urnas cerradas y amarradas con alambres de púa, dejando sólo al descubierto los rostros de cada uno de ellos para su reconocimiento, las que luego fueron sepultadas en nichos contiguos en el Cementerio local. Los Sres. Gac, Cabezas y Arraño fueron vistos por última vez en el ya citado Paso San Isidro, siendo llevados a la Escuela de Caballería Blindada, donde fueron ultimados y lanzados a unas fosas para ser retirados en la mañana del día siguiente a la ocurrencia de los hechos por un helicóptero que los transportó con destino desconocido, manteniéndose vigente dicha situación hasta el día de hoy. ”

Una de las víctimas, Osvaldo Mario Manzano Cortes, fue el padre de mis mandantes.

En este episodio caratulado “Asalto a la Patrulla Militar” se determinó la responsabilidad de los acusados Ángel Custodio Torres Rivera, Sergio Carlos Arredondo González, Francisco Javier Pérez Egert, Leonardo Quilodrán Burgos y Daniel Javier Walker Ramos como autores del delito de secuestro calificado de: Rubén Guillermo Cabezas Pares, Pablo Gac Espinoza, Levy Segundo Arraño Sancho, Víctor Enrique Fuenzalida Fuenzalida, Manuel Hernán Hurtado Martínez, Hugo Hernán Aranda Bruna, Ángel Mario Díaz Castro, Osvaldo Mario Manzano Cortés y Arturo Julio Loo Prado, por los ilícitos acaecidos el 18 de enero de 1974 en las cercanías de la ciudad de Quillota.”

Sostiene que el delito mencionado, además de sus consecuencias penales, generan efectos civiles, consistentes en la obligación de reparar a las víctimas y a sus familiares, responsabilidad civil que recae sobre el Estado de Chile.

Refiere que los hechos sucintamente relatados configurarían el delito de secuestro calificado y funda su pretensión en el hecho de que se encuentra acreditado, en autos, que el ilícito fue perpetrado por agentes del Estado, específicamente por funcionarios del Ejército, que actuaron dentro



Foja: 1

de una política sistemática de violación de derechos humanos implementada por el gobierno de la época en contra de sus adversarios políticos, en la cual la detención y posterior desaparición y/o ejecución de personas, sin perjuicio de otros crímenes, constituyeron una práctica habitual. El secuestro calificado de don Osvaldo Mario Manzano Cortes se llevó a cabo lejos de toda legalidad y los hechos actuaron siempre amparados por el gobierno de facto y haciendo una serie de maniobras que tendían a ocultar la perpetración de los ilícitos.

Agrega que el Estado de Chile, motu proprio, habría reconocido su responsabilidad en estos hechos en forma expresa a través del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (“Comisión Rettig”), Volumen I, Tomo 2, páginas 494-496, en la que se establece: “*Ejecución en Quillota. El día 18 de enero de 1974, seis destacados dirigentes de Quillota fueron ejecutados por personal de la Escuela de Caballería de dicha ciudad:*

Víctor Enrique Fuenzalida Fuenzalida, 35 años, jefe del Departamento Técnico de la Corporación de la Reforma Agraria (CORA) de Quillota y secretario provincial del Partido Comunista, se presentó voluntariamente a la Fiscalía Militar de Quillota el 15 de septiembre de 1973, luego de ser llamado por un bando militar, quedando detenido en el acto.

Manuel Hernán Hurtado Martínez. 35 años. empleado de la Tesorería de Quillota, secretario local del Partido Socialista, se presentó voluntariamente a la Comisaría de Carabineros de Quillota el 18 de septiembre de 1973 por haber recibido en su domicilio una citación de dicha Unidad Policial, quedando detenido en el acto.

Osvaldo Mario Manzano Cortez, 32 años, obrero textil, presidente del Sindicato de Rayón Said, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido el 17 de septiembre en su lugar de trabajo por efectivos militares de una de las Unidades acantonadas en Quillota.

Julio Arturo Loo Prado, 27 años, obrero textil, secretario del Comité de Producción de Rayón Said, militante comunista, fue detenido el 17 de septiembre de 1973, cuando se presentó voluntariamente a una de las unidades militares de Quillota.



Foja: 1

Ángel Mario Díaz Castro, dirigente poblacional, 41 años, obrero textil, fue detenido el 11 de septiembre de 1973 por efectivos militares acantonados en Quillota.

Hugo Hernán Aranda Bruna, 30 años, soltero, agricultor, dirigente vecinal. Se ignora la fecha exacta de su detención, probablemente ocurrida en la segunda quincena de septiembre. Se acreditó que Aranda permaneció recluido en los mismos recintos de detención que el resto de los ejecutados.

Según la versión oficial emitida por el Gobernador Militar del Departamento de Quillota, el fallecimiento de todos ellos se produjo a raíz de un asalto extremista dirigido en contra de la patrulla militar que los trasladaba entre la Escuela de Caballería y el Regimiento de Ingenieros de Quillota. Aprovechando dicha acción, los prisioneros habrían intentado fugarse, por lo que debieron ser dados de baja, pero dos de ellos habrían logrado escapar. Hasta la fecha, ambos permanecen desaparecidos:

Pablo Gac Espinoza, 43 años, alcalde de Quillota y militante socialista. Por disposición de las nuevas autoridades, debía concurrir a firmar a la Fiscalía Militar de Quillota, lo que hacía periódicamente. Fue detenido el 17 de enero de 1974 por efectivos militares de la localidad.

Rubén Guillermo Cabezas Parez, 46 años, abogado, Fiscal de la Corporación de Reforma Agraria (CORA) de Quillota, militante comunista, fue detenido en su oficina particular el 17 de enero de 1974, en presencia de testigos, y trasladado a una de las unidades militares de Quillota.

La Comisión no pudo aceptar la versión oficial, y se formó convicción de que los ocho prisioneros fueron ejecutados por los agentes del Estado que los mantenían bajo su custodia, quienes violaron sus derechos humanos. Fundamentan esta convicción las circunstancias que siguen:

- No es verosímil que haya sido necesario dar muerte a todos los afectados para evitar su presunta huida, puesto que iban desarmados y bajo fuerte vigilancia militar.*

- Varios detenidos se habían presentado voluntariamente ante las autoridades militares, por lo que no parece coherente que intentaran darse a la fuga. Incluso, algunos de ellos habían hecho contacto con algunos abogados para ser defendidos en el proceso que se había dicho se instruiría en su contra.*



Foja: 1

- *El presunto ataque extremista habría ocurrido en un lugar que contaba con una fuerte vigilancia armada por su carácter estratégico.*

Tampoco es verosímil que un ataque de tal naturaleza pudiese haberse intentado en horas de toque de queda y no se haya logrado capturar a ninguno de los asaltantes. Por lo mismo, no es creíble que los supuestos prófugos no hayan sido habidos.

- *Ningún extremista de los que supuestamente atacó la patrulla resultó muerto o herido; en cambio, seis de los detenidos resultan muertos. Tampoco resulta muerto ninguno de los miembros de la patrulla. El parte militar sólo señala la existencia de un efectivo herido leve, lo que no concuerda con la supuesta violencia del ataque según está descrito en el comunicado oficial.*

- *Tampoco resulta verosímil que dos personas destacadas y bien conocidas en la zona, Pablo Gac, alcalde de Quillota, y Rubén Cabezas, prestigiado abogado y Fiscal de la Corporación de la Reforma Agraria de esa ciudad, hayan sido los únicos sobrevivientes y hayan podido y querido darse a la fuga, sobre todo teniendo en cuenta que ambos habrían sido detenidos el mismo día, sin haber presentado la menor resistencia.”*

Añade que, como consecuencia directa del secuestro calificado de su padre, secuestro que terminó con la ejecución del mismo, los actores habrían sufrido un profundo daño moral que se ha traducido en un perjuicio irreparable de índole subjetivo.

Expone que la pérdida de un padre es siempre un hecho doloroso, pero lo es aún más cuando es producto de una violencia irracional, aplicada, tal cual ocurre con las situaciones en comento, como un castigo a quienes eran adherentes al proyecto político que representaba el gobierno del presidente Salvador Allende. La forma alevosa y con ensañamiento en que Osvaldo Mario Manzano Cortes fue detenido, torturado y ejecutado, así como la imposibilidad de expresar y compartir el dolor, puesto que eran víctimas de la represión del Estado; la impunidad de los autores -cuya identidad de algunos se conoció poco después de producidos los hechos-; la imposibilidad durante muchos años de acceder a la justicia ya que el Estado utilizó a su arbitrio distintos medios para impedir que se acreditara legalmente la verdad de lo sucedido, ya que las autoridades sostuvieron



Foja: 1

oficialmente que las víctimas habían intentado fugarse, versión que se han establecido judicialmente como falsa; la violenta e irrecuperable ruptura de los lazos afectivos y el efecto traumático de la misma, son algunas de las situaciones que habrían significado un dolor permanente a las demandantes.

Las actoras, doña Yanet, doña Paola y doña Sandra, todas de apellido Manzano Kasis, habrían sufrido un daño irreparable, ya que su padre fue detenido cuando ellas aun eran niñas pequeñas (cinco años, tres años y seis meses respectivamente), viéndose enfrentadas a una realidad que alteraría sus vidas para siempre. Desde el momento de la detención de su padre, el día 5 de septiembre de 1973, su realidad familiar habría cambiado, de repente ya no podrían disfrutar de la compañía de un padre cariñoso y las únicas ocasiones en que podrían verlo era en las visitas en la cárcel, las cuales eran escasas y nunca de suficiente duración. Además de esto, su realidad económica también se vio afectada, ya que Osvaldo era el proveedor principal de su núcleo familiar.

Manifiesta que el 17 de enero de 1974, luego de estar meses detenido, fue ejecutado don Osvaldo, lo que habría impactado tan fuertemente en la madre de las actoras, que se vio en la necesidad de abandonar el país rumbo a Mendoza. La ya difícil situación se vio agudizada, ya no contaban con ninguno de sus padres y además fueron separadas, ya que doña Yanet y doña Paola vivían con una tía materna, mientras que doña Sandra vivía con sus abuelos paternos.

Narra que todos estos cambios repentinos en una edad formativa impactaron fuertemente en la vida de las hermanas, quienes pasaron de vivir en una familia constituida y cariñosa, a perder a ambos padres, primero a su padre que fue ejecutado y luego a su madre que se tuvo que ir del país. No solo esto, si no que fueron separadas, perdiendo todo sentido de estabilidad en sus vidas y la compañía de los vínculos más importantes que se tienen en la niñez.

Relata que estima que el daño moral sufrido debería ser avaluado en una cantidad no inferior a los \$300.000.000 para cada una de las demandantes.

Refiere que don Osvaldo Mario Manzano Cortes fue afectado en el derecho fundamental y primario a la vida por el Estado, con el consiguiente



Foja: 1

daño moral para su familia, tiene ésta derecho a una reparación la que debe implicar el restablecimiento de la verdad y la indemnización de los perjuicios sufridos. Si bien es cierto que con una indemnización no recuperaran a su ser querido, sí es posible evaluar pecuniariamente el daño moral sufrido por lo que estima ajustada a derecho y justicia la suma antes indicada.

Invoca para su pretensión lo previsto en la Constitución Política de 1925, las Actas Constitucionales, artículos 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 38 de la Constitución Política de la República; 4, 42 y 44 de la Ley N°18.575; 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 27 de la Convención de Viena; alegando que la indemnización debe ser proporcional al daño provocado, cierta y real.

Cita una serie de jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, que avalaría su pretensión.

Indica que se darían todos los presupuestos que obligan al Estado a indemnizar los perjuicios causados, existiendo un daño moral; una acción de agentes del Estado; un nexo causal; y no existen causales de justificación que eximan al Estado de su responsabilidad.

Con fecha 10 de agosto de 2023, al folio 9, contesta la demanda el Fisco de Chile, solicitando su rechazo, con costas, o en subsidio, se rebaje sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido, con fundamento, en primer lugar, en la excepción de reparación integral, por haber resultado ya indemnizadas las actoras, dado que, conforme al ámbito de la llamada justicia transicional, se establecieron medios de reparación.

La Ley 19.123 estableció una pensión vitalicia para el cónyuge sobreviviente, la madre del causante o el padre de éste cuando aquella faltare o renunciare, la madre de los hijos de filiación no matrimonial del causante o el padre de éstos cuando aquella fuere la causante y los hijos menores de 25 años, o discapacitados de cualquier edad. En una primera etapa, esta pensión ascendió a la cantidad de \$140.000, mensuales. Sin embargo, luego de varias negociaciones se acordó aumentar su monto. Tal como se indicó en el proyecto de ley que establecería esa reforma, se buscaba con él “avanzar hacia un punto de máximo acuerdo, de máxima verdad, de máxima justicia, de máxima reparación”. Dicho proyecto dio



Foja: 1

lugar a la ley 19.980 y de conformidad al art. 2° de esa norma, el monto de la pensión se incrementó a contar del 1 de diciembre de 2004 en un 50%. A dicha suma debe añadirse el porcentaje equivalente a la cotización de salud. Sin dicha cotización de salud, el monto actual de la pensión para el grupo familiar asciende a la suma de \$210.000, mensuales.

Asimismo, el Estado ha desembolsado a diciembre de 2019, en concepto de Pensiones: la suma de \$247.751.547.837, como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig) y de \$648.871.782.936, como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech); Bonos: la suma de \$41.910.643.367, asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$23.388.490.737, por la ya referida Ley 19.992; Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123, Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de \$23.388.490.737, en consecuencia, a diciembre de 2019, el Fisco había desembolsado la suma total de \$992.084.910.400.

Agrega que, desde una perspectiva indemnizatoria, y tal como se indicó en la historia de la Ley 19.123, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a que podamos valorizarla para poder saber cuál fue su impacto compensatorio.

Añade que, el cálculo de los efectos indemnizatorios de una pensión vitalicia puede realizarse simplemente sumando las cantidades pagadas a la fecha, como asimismo las mensualidades que todavía quedan por pagar.

Adiciona que el impacto indemnizatorio de este tipo de pensiones sería bastante alto. Ellas serían, como se ha entendido de manera generalizada, una buena manera de concretar las medidas que la justicia transicional exige en estos casos obteniéndose con ello, compensaciones razonables que están en coherencia con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

Refiere que además de la indicada pensión, tanto la Ley 19.123 como la 19.980 consagran otras transferencias directas de dinero que se han creado con idénticos fines reparatorios. En primer lugar, y de conformidad al artículo 23 de la Ley 19.123, se entregó a los familiares de las víctimas una bonificación compensatoria de un monto único equivalente a doce



Foja: 1

meses de pensión. Para el caso que se solicite hoy, por ejemplo, esa compensación equivaldría a \$2.520.000.

Expone que, en la misma línea, la Ley 19.980 otorgó, por una sola vez, un bono de reparación de \$10.000.000, para los hijos del causante que nunca recibieron la pensión mensual de reparación, y por la diferencia que corresponda para aquellos que la recibieron, pero han dejado de percibirla.

Finalmente, los hijos de los causantes que se encuentren cursando estudios media jornada tendrán derecho a un subsidio mensual equivalente a 1.4 UTM, esto es, al día actual \$94.798.

Agrega que se concedieron otros derechos, como gratuidad en prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), en los servicios de salud del país, con la sola inscripción en la correspondiente oficina, cuyo programa cuenta con equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del programa, que incluye apoyo técnico y rehabilitación física; cuyo presupuesto, el año 2020, alcanzó a la cantidad de M\$6.543.883; en el ámbito educacional, se concedieron becas de estudios superiores y gratuidad en educación básica y media; en este sentido, al 31 de diciembre de 2015 los desembolsos asumidos por el Estado de Chile, invocando los beneficios o becas, respecto a los familiares de las víctimas de DDHH, como alumnos de Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica ascienden a \$90.977.774.148.

Indica que lo anterior, es sin perjuicio, de las reparaciones simbólicas, como actos positivos de reconocimiento, dirigidos esencialmente, a reducir el daño moral padecido por las víctimas de violaciones a los derechos humanos, como lo son un memorial en el Cementerio General en Santiago; el establecimiento del Día Nacional del Detenido Desaparecido, fijado para el 30 de agosto de cada año; la construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos; establecimiento del Premio Nacional de los Derechos Humanos; y la construcción de diversos memoriales y obras a lo largo del país, todo lo cual ha implicado grandes gastos económicos del Estado.

Expresa que la Corte Interamericana de Justicia ha valorado el esfuerzo del Estado de Chile, en su política de reparación de violaciones a



Foja: 1

los derechos humanos e, incluso, ha rechazado pretensiones indemnizatorias de personas que ya han recibido beneficios del Estado por ese motivo.

Alega que, por lo demás, resultaría incompatible la pretensión indemnizatoria del actor, con los beneficios establecidos en la Ley N°19.123.

Opuso, además, en subsidio, la excepción de prescripción extintiva de la acción deducida, la que sustentó en lo previsto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación al artículo 2497 del mismo cuerpo legal, considerando que aún, pudiendo entenderse suspendida la acción durante la dictadura militar, por imposibilidad de la víctima de poder ejercer dicha acción, igualmente desde la restauración de la democracia a la fecha de notificación de la demanda producida el 20 de julio de 2023, habría transcurrido en exceso el plazo de prescripción, como también, el plazo de extinción ordinaria del artículo 2515 del Código Civil.

Expresa que la imprescriptibilidad es una cuestión extraordinaria y requiere, siempre, de declaración explícita, que en el caso no existiría, además, que la indemnización, en caso alguno, puede tener un carácter punitivo, ni de desigualdad, precisando que ninguno de los instrumentos internacionales de derechos humanos aludidos por el actor establecen la imprescriptibilidad de acciones patrimoniales derivadas de delitos de lesa humanidad, ni prohíben la aplicación del derecho interno, citando y reproduciendo al efecto un fallo de la Corte Suprema de unificación de jurisprudencia, de 21 de enero de 2013.

Alega, por otra parte, que la indemnización pretendida resultaría excesiva, la cual no puede constituir una fuente de lucro o ganancia, debiendo el tribunal, en subsidio, regular el daño moral, considerando los pagos ya recibidos del Estado.

En cuanto al pago de reajustes e intereses, hizo presente que solo procederían una vez que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada, dado que solamente en esa época se establecería la obligación.

Con fecha 30 de agosto de 2023, al folio 13, replica el actor, reiterando lo expresado en su demanda y señalando, respecto de la excepción de reparación integral, que el hecho de haber obtenido pensiones de reparación con arreglo a las Leyes Nro. 19.123 y Nro. 19.980 por parte



Foja: 1

de algunos familiares, no es óbice para que se indemnice mediante un monto fijado por un tercero imparcial, que es un Tribunal de la República.

Sostiene que la pretensión del Fisco de Chile resulta irreconciliable con la normativa internacional ya señalada en la demanda, porque el derecho común interno sólo es aplicable cuando no contradice el derecho internacional, en materias de graves violaciones a los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad.

Asegura que la excepción interpuesta por el Fisco consagraría un régimen de pensiones asistenciales, que no sería de ninguna manera incompatible con la indemnización perseguida, ya que estas reparaciones no dan cabida para reparar todo el daño que se les ha ocasionado a las víctimas. Por otra parte, no se habría establecido en las respectivas leyes ya mencionadas, ningún régimen de incompatibilidad con las indemnizaciones judiciales, ni mucho menos que su aceptación implique una renuncia a las acciones judiciales correspondientes.

Refiere que en cuanto a la prescripción, reiteró su alegación de la supuesta imprescriptibilidad de la acción civil deducida, precisando la acción tendría carácter constitucional, conforme los tratados internacionales ratificados por Chile.

Precisa que no resultan aplicables a estos efectos las reglas del Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, en consecuencia, pretender aplicar las disposiciones del Código Civil a la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el ordenamiento jurídico, hoy resulta improcedente.

Afirma que, respecto de la prescripción de las acciones de reparación por violaciones a los derechos humanos, debe aplicarse el derecho público como el derecho internacional.

Por último, respecto del monto demandado, reiteró lo expresado en su demanda, señalando que el tribunal fija el monto definitivo, haciendo presente que éstos se habrían aumentado en el tiempo, por los diversos tribunales; y que los reajustes e intereses, también, serán determinados por el tribunal respecto de su exigibilidad.



Foja: 1

Con fecha 12 de septiembre de 2023, al folio 16, duplica la demandada, reiterando lo expresado en su contestación y aludiendo a una sentencia de la Excma. Corte Suprema, de 21 de enero de 2013 y reproduciendo sentencia dictada por la referida Corte, con fecha 16 de marzo de 2016, respectivamente.

Con fecha 12 de diciembre de 2023, al folio 20, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que obra en autos.

Con fecha 19 de julio de 2024, al folio 47, se citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que, don Boris Paredes Bustos, abogado, en representación de doña Yanet Manzano Kasis, doña Paola Manzano Kasis, y doña Sandra Manzano Kasis, interpone demanda de indemnización de perjuicios por Responsabilidad Extracontractual del Estado en contra del Fisco de Chile, por los daños ocasionados a las demandantes por los hechos indicados respecto a la detención y asesinato de su padre por distintos miembros de las Fuerzas Armadas del Estado de Chile, y se condene al Fisco de Chile a pagar la suma de \$300.000.000, por concepto de daño moral a cada una de las demandantes, o la suma que el tribunal estime ajustada a derecho en consideración al daño provocado, con reajustes, intereses y costas.

Funda su pretensión en los argumentos de hecho y fundamentos de derechos relatados latamente en lo expositivo del presente fallo.

SEGUNDO: Que han resultado hechos no controvertidos en el proceso, aceptados por ambas partes, que el padre de las actoras, don Osvaldo Manzano Cortés, fue efectivamente, una víctima de violación de derechos humanos durante el desarrollo de la Dictadura Militar, y que el Estado ha efectuado acciones de reparación, mediante pensiones asistenciales y simbólicas.

Por su parte, se encuentra controvertido el hecho de encontrarse todas ya reparadas integral y satisfactivamente.

Asimismo, se encuentra controvertido el hecho de encontrarse prescrita la acción de autos.



Foja: 1

TERCERO: Que el Fisco deduce excepción de improcedencia de la indemnización demandada, por haber sido ya reparadas las actoras correspondientes a las hijas de don Osvaldo Manzano Cortez, víctima de crímenes de lesa humanidad, alegando que la indemnización solicitada en autos se desenvuelve en el marco de infracciones a los Derechos Humanos, cuya comprensión se da en el ámbito de la llamada “Justicia Transicional”, tanto en el Derecho Interno como en el Internacional.

Refiere que los beneficios pecuniarios al amparo de la ley N°19.992 y sus modificaciones, y que respecto de las demandantes han recibido reparaciones satisfactivas, los que, no obstante haber sido descartados de pagos directos en dinero, se les consideró en diversos desagravios de carácter simbólico y en programas, especialmente de salud, para reparar el daño moral, de manera que los ya referidos mecanismos de reparación, al haber compensado precisamente aquellos daños, no pueden, por ello, ser exigidos nuevamente.

CUARTO: Que la discusión esencial del pleito judicial ha rondado en cuanto a si las acciones de reparación efectuadas por el Estado habrían sido suficientes para reparar el daño sufrido por las actoras; en sí la acción deducida se encontraría prescrita; como también, en sí la pretensión indemnizatoria de las demandantes resultaría desproporcionada, relacionado ello con la extensión que habría tenido el daño moral que padecieron las actoras.

QUINTO: Que el actor rindió la siguiente prueba a fin de justificar sus argumentos:

Documental:

1) Certificados de nacimiento de doña Yanet Manzano Kasis; doña Paola Manzano Kasis, y doña Sandra Manzano Kasis, agregados al folio 1.

2) Copia de las sentencias de primera instancia y segunda instancia y sentencia de la E. Corte Suprema, causa Asalto a la Patrulla Militar de Quillota, agregados al folio 1.

3) Copia digital de Certificado de Matrimonio entre don Luis Domingo Lillo Vega y doña Ana Albertina Araya Estrada, que acredita su calidad de cónyuges, agregado al folio 1.



Foja: 1

4) Noticia del diario “El observador” publicada el 17 de enero de 2024 (link <https://www.observador.cl/quillota-con-caminata-y-acto-recordaran-a-las-victimas-del-falso-asalto-a-la-patrulla/>) donde constan las conmemoraciones que se realizarán este año por el episodio (falso) Asalto a la Patrulla Militar, agregada al folio 25.

5) Set de fotografías de la conmemoración, agregada al folio 25.

6) Fotografías de murales realizados este año de cada uno de los desaparecidos y torturados bajo el puente donde fueron ejecutados, agregada al folio 25.

7) Auto de procesamiento de fecha 10 de julio de 2003, agregado al folio 26.

8) Auto de procesamiento de fecha 27 de enero de 2004, agregado al folio 26.

9) Acusación de fecha 05 de agosto de 2004, agregada al folio 26.

10) Sentencia primera instancia de fecha 27 de octubre de 2008, agregada al folio 26.

11) Sentencia condenatoria segunda instancia de fecha 25 de agosto de 2009, agregada al folio 26.

12) Sentencia Corte Suprema de fecha 21 de abril de 2011, agregada al folio 26.

13) Informe de evaluación de daño elaborado por el programa PRAIS respecto de Yanet Manzano Kasis, agregado al folio 27.

14) Informe de evaluación de daño elaborado por el programa PRAIS respecto de Paola Manzano Kasis, agregado al folio 27.

15) Informe de evaluación de daño elaborado por el programa PRAIS respecto de Sandra Manzano Kasis, agregado al folio 27.

16) Certificados de nacimiento de Yanet, Paola y Sandra, todas apellidadas Manzano Kasis, agregados al folio 27.

17) Tomo II del Volumen I del Informe Rettig, (relato de estos hechos páginas 494 a 496), agregado a los folios 28, 29 y 30.

Documentos agregados legalmente a los autos y no objetados de contrario.

Audiovisual:



Foja: 1

Agregada al folio 24, mediante pendrive dejado en la custodia del tribunal, el que fue incorporado a los autos mediante audiencia de percepción documental, efectuada con fecha 3 de julio de 2024, al folio 41.

La prueba consistió en dos videos denominados: “Sinopsis del Archivo Oral Quillota, enero 1974: Montaje Asalto a la Patrullados”; y un video que contienen la declaración de doña Yanet Manzano, año 2013, instrumental no objetada de contrario.

SEXTO: Que, por su parte, la demandada rindió la siguiente prueba documental para justificar sus defensas o desvirtuar los argumentos y pruebas del actor:

Copia del oficio ORD: DSGT N°4792-16915, de fecha 11 de octubre de 2023, remitido por el IPS, agregado legalmente a los autos con fecha 11 de octubre de 2023, al folio 18, no objetado.

SÉPTIMO: Que, así las cosas, corresponde valorar las probanzas rendidas por las partes, la que se ha limitado a instrumentos. En este sentido, no se registran impugnaciones, fundadas en causal legal, respecto de ninguno de los que fueron puestos en conocimiento de la contraria, ni alegaciones respecto de las virtudes formales de los públicos. En consecuencia, se reconoce pleno valor probatorio a los instrumentos señalados, según su naturaleza, y se tienen como instrumentos públicos en juicio, los que tengan dicha naturaleza.

OCTAVO: Que conforme a los hechos reconocidos por las partes, se debe tener como hechos justificados en el proceso, la veracidad de haber sido don *Oswaldo Manzano Cortez*, un prisionero político y ejecutado del régimen militar en dictadura, producido con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, y víctima de violación a los derechos humanos, y que resulta efectivo, también, que las actoras han sido beneficiadas con reparaciones de parte del Estado, por su calidad de hijas de víctima de delitos de lesa humanidad, recibiendo, al menos, ciertas pensiones asistenciales, lo cual se desprende del oficio remitido por el IPS, agregado legalmente a los autos con fecha 11 de octubre de 2023, al folio 18, no objetado.

NOVENO: Que previo a verificar si se dan los presupuestos para acceder a la responsabilidad extracontractual del Estado, por acciones de sus



Foja: 1

agentes, deberá revisarse si se dan los presupuestos legales para acceder a la primera defensa argumentada por el Fisco de Chile, esto es, la excepción de reparación integral deducida.

DÉCIMO: Que la excepción de reparación integral e improcedencia de la indemnización, deducida por la demandada se ha sustentado, esencialmente, en haberse producido una reparación del daño moral del actor por dicha parte, conforme a lo previsto en la Ley N°19.123, y en que las actoras habrían recibido, puntualmente, beneficios de dicha Ley, así como de la Ley N°19980, además, de beneficios en derecho de gratuidad en prestaciones médicas, según Ley N°19.234, otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), en todos los servicios de salud públicos del país, que comprenden profesionales de atención exclusiva; beneficios educacionales, consistentes en becas para la víctima, para un hijo o para un nieto de aquel; y beneficios de vivienda, correspondientes a subsidios para tal efecto, los cuales existen, independientemente de si los utilizaron.

UNDÉCIMO: Que, conforme el mérito del informe remitido por Instituto de Previsión Social, de fecha 11 de octubre de 2023, agregado legalmente a los autos con la misma fecha, al folio 18, no objetado, puede establecerse por el tribunal, fehacientemente, que las actoras han percibido como beneficios de reparación de las leyes números 19.123 y 19.980, los siguientes:

Doña Paola Manzano Kasis, desde julio de 1991 a diciembre de 1995, las sumas de \$1.769.677, por concepto de pensiones Ley N°19.123; de \$8.230.323, referido a aporte único Ley N°19980; \$296.472 Bonificación Comp.; de \$46.600 por concepto de aguinaldos, siendo el total percibido de \$10.343.072.

Doña Sandra Manzano Kasis, desde julio de 1991 a diciembre de 1998, las sumas de \$4.006.628, por concepto de pensiones Ley N°19.123; de \$5.993.372, referido a aporte único Ley N°19980; \$296.472 Bonificación Comp.; de \$93.144 por concepto de aguinaldos, siendo el total percibido de \$10.389.616.

Doña Yanet Manzano Kasis, desde julio de 1991 a diciembre de 1993, las sumas de \$792.951, por concepto de pensiones Ley N°19.123; de



Foja: 1

\$9.207.049, referido a aporte único Ley N°19980; \$296.472 Bonificación Comp.; de \$22.300 por concepto de aguinaldos, siendo el total percibido de \$10.318.772.

DUODÉCIMO: Que según lo previsto en el artículo 2° de la Ley N°19.123, en su parte pertinente, se dispone: *“Le corresponderá especialmente a la Corporación:*

1.- Promover la reparación del daño moral de las víctimas a que se refiere el artículo 18 y otorgar la asistencia social y legal que requieran los familiares de éstas para acceder a los beneficios contemplados en esta ley.”

De acuerdo con dicha disposición legal, resulta evidente que el objeto de las prestaciones que dicha norma contempla, están destinadas a la reparación de las víctimas de presión política y tortura, como es el caso del actor de autos.

DÉCIMO TERCERO: Que de las demás disposiciones de la citada Ley N°19.123, que se refiere a la creación de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y que establece Pensión de Reparación y otorga otros beneficios en favor de las personas que señala, resulta de manifiesto el esfuerzo que ha efectuado el Estado de Chile, para reparar, al menos en parte, el daño sufrido por las víctimas de tortura y prisión política durante el régimen militar, a través de la estructuración de pensiones y otros beneficios para los afectados y su grupo familiar, como también, reparaciones simbólicas, referidas a la memoria de los excesos y delitos cometidos en contra de las víctimas de torturas y prisión política de la Dictadura Militar, como memoriales, monumentos, efemérides, museos y otros.

Cabe agregar que la estructura y prestaciones disponibles para los demandantes, en materia de salud y de forma preferente, a través del programa PRAIS, implican un valor monetario adicional a disposición de las actoras, independientemente de si estas optan o no por ocuparlos, lo que ocurre, también, con los beneficios de educación y vivienda.

En todo caso, de los propios informes psicológicos acompañados por las actoras, se aprecia, que debido a las consecuencias psicológicas que han padecido, comenzaron a tratarse en el programa médico PRAIS, accediendo



Foja: 1

concretamente a una más de las reparaciones que ha puesto el Estado de Chile a su disposición.

DÉCIMO CUARTO: Que conforme a lo asentado precedentemente y lo reconocido por las actoras en el proceso, debe tenerse por efectiva la reparación integral que ha efectuado el Estado con motivo del asesinato de su padre de parte de agentes del Gobierno Militar en Dictadura, reparación que de acuerdo a las circunstancias y la capacidad económica del Estado de Chile, debería estimarse suficiente, considerando, por una parte, que el dolor infringido a las demandantes, jamás podrá ser reparado con suma alguna, pero también por otro lado, que el Estado también ha sido víctima de un gobierno de facto, que alteró la institucionalidad, precisamente, por los órganos llamados a defender al Estado y a las personas que lo componen.

A mayor abundamiento, debe considerarse, también, que ha sido el propio Estado de Chile, el que ha propendido acciones para poder establecer quienes han sido víctimas de delitos de lesa humanidad, durante el régimen militar, para poder, precisamente, tratar de efectuar las reparaciones que en Derecho corresponden, bajo un procedimiento administrativo más simplificado y que opera bajo el principio de la buena fe, evitando la judicialización del establecimiento de la calidad de víctima de violación a los derechos humanos.

DÉCIMO QUINTO: Que sin perjuicio de lo anterior, la interpretación sistemática de las normas dispuestas por las Leyes 19.123 y 19.992, permite deducir que la bonificación de reparación instaurada en favor de ciertos familiares de ejecutados políticos y de víctimas directas de delitos de lesa humanidad, constituye un beneficio de carácter social, no una indemnización del daño moral sufrido por éstas, pues, en la determinación de su cuantía no se aprecia que se hayan considerado elementos particulares y/o personales de quienes soportaron dicho sufrimiento; requisito esencial a la hora de fijar una indemnización que no puede ser entendida sino con la finalidad de reparar o compensar un perjuicio cierto y determinado, no existiendo una incompatibilidad entre dichas compensaciones y aquellas que legítimamente y por vía jurisdiccional pretendan las víctimas, cuando se aprecie la existencia de un daño que no ha sido reparado íntegramente.



Foja: 1

En consecuencia, las Leyes 19.123, 19.992 y 20.874, no pueden substituir la pretensión de compensación del daño moral soportado por las actoras, añadiéndose que los beneficios conferidos por dichas normas sólo apuntan a edificar políticas asistenciales del Estado, respecto de los familiares de las víctimas o de ellas mismas, sujetas a condiciones objetivas, lo que evidencia que no se trata de una reparación total y efectiva del daño sufrido por las víctimas.

DÉCIMO SEXTO: Que, como consecuencia de lo razonado en las motivaciones anteriores, deberá acogerse parcialmente la excepción de reparación integral, deducida por la demandada, por haber sido ya indemnizadas de manera objetiva las actoras en virtud de ello, en los términos expuestos precedentemente, considerándose dicha reparación solo con la finalidad de determinar el quantum del monto a indemnizar por daño moral.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, sin perjuicio de lo referido precedentemente, deberá determinarse, a continuación, si se dan los presupuestos de derecho para poder acoger la excepción de prescripción opuesta, en forma subsidiaria.

DÉCIMO OCTAVO: Que respecto a la prescripción de la acción en materia de derechos humanos se debe considerar, que el sistema de responsabilidad del Estado deriva de los artículos 6° inciso tercero de la Constitución Política de la República y 3° de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, preceptos que, de aceptarse la tesis de la defensa, quedarían sin aplicación, siendo obligatoria su observancia, que por su parte los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagran que la responsabilidad del Estado por ilícitos de esta clase, queda sujeta a las reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas, ni hacer primar el derecho interno, dado que ilícitos imputable a un Estado, surgiendo de esa forma la responsabilidad internacional de éste por la violación de una normas de Derechos Humanos y como consecuencia nace el deber de reparación y de cesar los actos de vulneración denunciada.

De esa forma las normas de rango superior imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y en especial a los tribunales de



Foja: 1

justicia, en tanto éstos no pueden interpretar los preceptos de derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de Derecho Internacional que consagran el derecho a la reparación, pues ello comprometería la responsabilidad internacional del Estado de Chile, ya que, el Derecho Internacional, traducido en Convenios y Tratados disposición constitucional, son vinculantes, como ocurre con la propia Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que se encuentra vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980, que establece en su artículo 27 que el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, pues de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del Estado.

DÉCIMO NOVENO: Que, se hace necesario destacar que en los sucesos reseñados y que constituyen el fundamento de la acción, intervinieron agentes del Estado, lo que evidencia una contravención a lo preceptuado en el artículo 6° de la Constitución Política de la República, que obliga a los órganos del Estado a someter su acción a ella, a las normas dictadas conforme a la misma y al artículo 5° de nuestra Constitución, en cuanto el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana; siendo deber de aquellos respetar y promover tales derechos garantizados. Esta última disposición constitucional hace posible incorporar al derecho nacional las obligaciones contempladas en los instrumentos internacionales, tales como la de indemnizar íntegramente los daños cometidos por violaciones de los derechos humanos, la que, en consecuencia, adquiere rango constitucional.

Así las cosas al tratarse el presente caso de una demanda civil que se sustenta en un delito que, de acuerdo a la conciencia jurídica se denomina de “lesa humanidad”, se puede concluir que tal calificación no sólo trae aparejada la imposibilidad de amnistiar el ilícito y declarar la prescripción de la acción penal que de él emana, sino que también implica la inviabilidad de proclamar la extinción, por el solo transcurso del tiempo, del derecho de ejercer la acción civil indemnizatoria derivada del delito cuya existencia ha sido pacífica, de forma tal que este tipo de ilícitos, cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la



Foja: 1

acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna.

VIGÉSIMO: Que, conforme lo señalado, se concluye que procede la indemnización que se reclama, atendiendo al contexto en que se verificó el delito, esto es, en un momento de extrema anormalidad institucional, en que los hechores -agentes del Estado- en representación del gobierno de la época, como quedó asentado en el proceso, ejecutaron ilícitos de tal gravedad, que imponen al Estado de Chile la obligación de resarcir el daño causado, tal como se desprende del bloque normativo integrado, entre otros, por el Reglamento de La Haya de 1907, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Resolución 2005/35, de 19 de abril de 2005 de la Comisión de Derechos Humanos, que en su conjunto consagran el derecho a buscar y conseguir plena reparación, incluida la restitución, indemnización, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición, imponiendo tal resarcimiento al respectivo Estado que ha violado los derechos humanos de sus ciudadanos.

Sin perjuicio de lo anterior, ahora cabe determinar el *quantum* del detrimento resultado de las acciones cometidas por los agentes del Estado, para lo cual se considera lo complejo de su determinación, dado que ningún monto podrá resarcir completamente a las ofendidas, ni restablecerlas a la situación anterior al acaecimiento de los hechos.

Sin embargo, la indemnización por daño moral es meramente satisfactoria, lo que viene a significar que con ella se pretende una ayuda o auxilio que le permita a la víctima atenuar el daño.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, en relación con lo anterior, ha quedado demostrado que las actoras son víctimas por repercusión del delito de lesa humanidad de que fue víctima su padre, puesto que no solo sufrió privación ilegítima de libertad, sino que además corresponde a un ejecutado político, acción perpetrada por agentes del Estado, en los términos y magnitudes que se consignaron en este fallo. Luego, la pretensión indemnizatoria, claramente deriva de los padecimientos emocionales que han tenido que sobrellevar; hechos que además, no han sido objeto de contradicción, dando cuenta del estrés post traumático de carácter grave y extenso que afecta a las actoras, alteraciones en su salud mental producto de



Foja: 1

los acontecimientos que debieron enfrentar como hijas de un ejecutado político; y por lo tanto, conforme a la experiencia científica, los menoscabos permanentes en la salud mental de las víctimas de este tipo de ilícitos.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, con todo lo señalado, la cuantificación del daño se hará prudencialmente por el tribunal, habida consideración la naturaleza, entidad y extensión del mismo, teniendo para ello especialmente presente, las circunstancias en que se produjeron los hechos, la edad de las actoras a la época en que fue asesinado su padre; la duración y entidad de los padecimientos emocionales sufridos; y los montos judicialmente asignados tanto a las víctimas directas de violaciones a los derechos humanos en causas similares, como a los hijos y padres de ejecutados políticos, en consecuencia, encontrándose comprobada la comisión del delito de lesa humanidad ejecutado por agentes del Estado en contra de don Osvaldo Manzano Cortez, padre de las demandantes, la circunstancia de los detrimentos morales que estas han sufrido por el hecho descrito y teniendo en consideración lo dispuesto en los artículos 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República y 4 de la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado, habiendo nacido la obligación del Estado respecto de indemnizar los referidos menoscabos, y atendida la imposibilidad de realizar una medición objetiva de la intensidad del dolor o merma en el proyecto de vida que han padecido las demandantes producto de la pérdida de su progenitor a manos de agentes del Estado, regulándose, en consecuencia, prudencialmente el monto de la indemnización a pagar por el Estado a las actoras en la suma que se indicará en la resolutive de esta sentencia.

VIGÉSIMO TERCERO: Que la suma que se fijará a título de indemnización a las actoras deberá pagarse reajustada de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor entre la fecha en que la presente sentencia quede ejecutoriada y su pago efectivo; así reajustada, devengará intereses corrientes para operaciones reajustables en el mismo lapso.

VIGÉSIMO CUARTO: Que la demás prueba rendida, no detallada o considerada en forma especial, en nada incide en lo asentado precedentemente.



Foja: 1

VIGÉSIMO QUINTO: Que en cuanto a las costas de la causa cada parte soportará las propias, debido a no haber resultado totalmente vencida la demandada.

Por estas consideraciones, normas citadas, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 160, 170, 171, 254 y siguientes, 342, 346, 426 del Código de Procedimiento Civil; 1°, 4°, 6°, 7°, 19, 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República; 1, 3 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 4.1 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; Los Convenios de Ginebra de 1949; 1° de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 6, 7 y 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Principios de Núremberg; la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas y artículo 7° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, se declara:

I.- Que se acoge la demanda deducida en lo principal del escrito de 26 de junio de 2023, respecto de doña **Yanet de Las Mercedes Manzano Kasis** y se condena al demandado a pagar a la actora, la suma de **\$30.000.000** (treinta millones de pesos) por concepto de indemnización de perjuicios, a título de daño moral.

II.- Que se acoge la demanda deducida en lo principal del escrito de 26 de junio de 2023, respecto de doña **Paola Andrea Manzano Kasis** y se condena al demandado a pagar a la actora, la suma de **\$30.000.000** (treinta millones de pesos) por concepto de indemnización de perjuicios, a título de daño moral.

III. Que se acoge la demanda deducida en lo principal del escrito de 26 de junio de 2023, respecto de doña **Sandra Valeska Manzano Kasis** y se condena al demandado a pagar a la actora, la suma de **\$30.000.000** (treinta millones de pesos) por concepto de indemnización de perjuicios, a título de daño moral.

IV. Que se acoge parcialmente la excepción de reparación integral del Estado.

V. Que se rechaza, la excepción de prescripción interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado.



VI. Que cada parte soportará sus costas.

Anótese, regístrese y notifíquese.

Pronunciada por doña **Cecilia Pasten Pérez**, Juez Suplente. /dbh

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, cinco de Agosto de dos mil veinticuatro**

